**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA: 5/2004.**

SERVIDOR PÚBLICO:

México, Distrito Federal a siete de junio de dos mil cuatro.

Vistos para emitir resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa **5/2004**, y;

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por oficio C/CRARP/DRP/943/2004 de dieciséis de marzo de dos mil cuatro, el Director de Registro Patrimonial hizo del conocimiento de la Directora de Responsabilidades de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presunta infracción en que incurrió el servidor público *****, a lo dispuesto en los artículos 8, fracción XV, y 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como a los Acuerdos Generales Plenarios 3/1994 y 6/1996, al haber presentado extemporáneamente la declaración de conclusión de encargo, como Directora de Área, adscrita a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Por acuerdo signado por el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de marzo de

dos mil cuatro, se admitió a trámite la denuncia por incumplimiento de la obligación de presentar la declaración de conclusión de encargo en contra de *****, se registró con el número de expediente 5/2004; y, el cinco de abril del mismo año, se notificó a dicho servidor público del procedimiento administrativo iniciado en su contra y, con fundamento en el artículo 134, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se le requirió para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de cuenta, formulara un informe escrito sobre todos y cada uno de los hechos que se le imputaron y ofreciera las probanzas que en su defensa tuviera.

TERCERO. El diecinueve de abril de dos mil cuatro la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dictamen con los puntos resolutivos siguientes:

“PRIMERO. ***, no es responsable de la infracción administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación señalada en el artículo 8, fracción XV, en relación con el 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme lo expuesto en el cuarto considerando de este dictamen.**

“SEGUNDO. Notifíquese personalmente a ***,
y una vez hecho, remítase los autos del
procedimiento administrativo de responsabilidades
en que se actúa a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, para los efectos precisados en la parte final
del último considerando.”**

Las consideraciones en que se sustenta dicha propuesta de resolución, en síntesis, son las siguientes:

I. La infracción atribuida a ***** consiste en haber presentado extemporáneamente la declaración de conclusión de encargo fuera del plazo que establece el artículo 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que se acompañó la copia fotostática del acuse de recibo de dicha declaración de ocho de marzo de dos mil cuatro, expedido por el Director de Registro Patrimonial, donde aparece que presentó en forma extemporánea su declaración de conclusión de encargo como Directora de Área puesto de Confianza adscrita a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, nombramiento respecto del cual, los servidores públicos que lo desempeñen están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial, según lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Acuerdo 6/1996.

II. ***** es responsable administrativamente de la falta atribuida, consistente en presentar su declaración de conclusión de encargo fuera de los sesenta días naturales siguientes al en que causó baja, toda vez que:

a) De acuerdo a lo establecido en el punto Quinto, numeral 16, del Acuerdo General Plenario 6/1996, de cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis, los secretarios técnicos tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial.

b) Lo anterior es así, toda vez que en el caso examinado, entre otros de los antecedentes que obran en el expediente, se advierte lo siguiente:

1. El treinta de junio de dos mil tres, el Secretario de la Contraloría y Gestión Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, expidió nombramiento a *****, como Directora de Área, adscrita a la Dirección General de presupuesto y Contabilidad de este Alto Tribunal, con efectos la prórroga de nombramiento a partir del Primero de julio del mismo año;

2. El treinta de diciembre de dos mil tres, se expidió el aviso de baja de *****, como Directora de Área, por invalidez con efectos a partir de esa misma fecha;

3. De la copia del acuse de recibo de la declaración de conclusión de encargo presentada por ***** el ocho de marzo de dos mil cuatro, se advierte que la misma es extemporánea,

esto es, que fue presentada fuera del plazo de sesenta días que prevé la referida ley de responsabilidades para cumplir con dicha obligación, si se considera que el plazo comenzó a correr al día siguiente de su baja por invalidez, esto es, a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil tres y que la declaración de conclusión de encargo debía presentarse a más tardar el veintiocho de febrero de dos mil cuatro;

c) Por tanto, *********, sí cometió la infracción administrativa que se le atribuye al no haber presentado con oportunidad su declaración de conclusión de encargo, como lo ordena el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que presentó su declaración de conclusión hasta el ocho de marzo del dos mil cuatro, esto es, fuera del plazo de sesenta días naturales que prevé el artículo 37, fracción II, de la mencionada ley, de ahí que, sea evidente que incurrió en la infracción a que alude el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir lo dispuesto en el primero de los preceptos citados de la ley de responsabilidades.

Finalmente, en el dictamen se estableció que no procedía imponer alguna sanción porque las defensas que hizo valer y las pruebas que ofreció ********* a su favor, justificaron su demora en el cumplimiento de la obligación de presentar declaración de conclusión de encargo, pues evidenciaron la existencia de una causa de fuerza mayor al demostrar que estuvo imposibilitada por cuestiones de salud de cumplir con su obligación.

CUARTO. El referido dictamen se notificó personalmente a la servidora pública de cuenta, el veintisiete de abril de dos mil cuatro, haciéndole saber que con fundamento en el artículo tercero, fracción XIV, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General de Administración II/2003, reformado por el diverso Acuerdo General XI/2003, tiene derecho a comparecer ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los diez días siguientes al en que surtó efectos dicha notificación, a manifestar por escrito lo que a su derecho conviniera.

Practicada la notificación a la que se alude en el párrafo que antecede, mediante proveído de igual fecha, el Contralor de este Alto Tribunal remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos el expediente de responsabilidad administrativa **5/2004.**

QUINTO. El cuatro de junio de dos mil cuatro, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal emitió opinión en el sentido de que ***** no es responsable administrativamente de la falta materia de este procedimiento de responsabilidad administrativa.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente procedimiento de responsabilidad administrativa seguido

en contra de *****, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 133, fracción II, en relación con el 14, fracción XXI, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se trata de un servidor público de este Alto Tribunal al que se le atribuye una conducta infractora que no está catalogada como grave.

SEGUNDO. Antes de abordar el estudio del referido dictamen y del procedimiento que le precedió, resulta conveniente precisar que tal y como se determinó al emitir la resolución correspondiente al procedimiento de responsabilidad administrativa 17/2003, ante la falta de regulación expresa, bien sea en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o en las disposiciones de observancia general que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe aplicarse directamente lo dispuesto en el marco legal que constituye el sistema general de responsabilidades y que se encuentra establecido en la respectiva ley federal, es decir, debe atenderse a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que si en el artículo 47 de este ordenamiento se establece que en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esa ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe concluirse que ante los vacíos legislativos que presente la regulación creada específicamente para esta Suprema Corte y la citada Ley de Responsabilidades el ordenamiento de aplicación

supletoria será precisamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

TERCERO. Por principio, cabe señalar que del análisis del expediente relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa 5/2004, se advierte que en él se siguieron las respectivas formalidades del procedimiento, en tanto que, con motivo del seguimiento de la evolución de situación patrimonial de los servidores públicos: **1.** El Director de Registro Patrimonial informó a la Directora de Responsabilidades sobre la posible infracción en que incurrió *****, es decir, denunció ante el órgano competente de la Contraloría la comisión de una falta administrativa con lo que se dio inicio al procedimiento. **2.** El Contralor de este Alto Tribunal acordó y registró el procedimiento sobre la probable infracción y se otorgó un plazo de cinco días hábiles para que ***** rindiera su informe respecto de los hechos que se le imputaron y ofreciera las pruebas relacionadas con su defensa. **3.** El servidor público rindió el informe solicitado y ofreció las pruebas que consideró necesarias para su defensa. **4.** El Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el dictamen correspondiente y lo remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. **5.** Se otorgó el plazo para que ***** manifestara lo a que su derecho conviniera en términos de lo previsto en el artículo tercero, fracción XIV, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General de Administración II/2003, sin que dicho servidor público ejerciera esa prerrogativa.

CUARTO. El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con la denuncia presentada por el Director de Registro Patrimonial en contra de ***** y una vez desarrollado el procedimiento administrativo, la Contraloría de este Alto Tribunal estimó que dicha servidora pública es responsable de la infracción administrativa que se le atribuyó en la denuncia antes referida, esto es, la prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento a la obligación señalada en el artículo 8, fracción XV, en relación con lo dispuesto en el artículo 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y punto QUINTO, numeral 16, del Acuerdo Plenario 6/1996.

De tal manera, para estar en aptitud legal de resolver sobre si ***** incumplió alguna de sus obligaciones relacionadas con el registro patrimonial, es imprescindible tener presente el contenido de los preceptos que se estimaron violados en la referida denuncia.

Así, conviene precisar que los artículos 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 8°, fracción XV, y 37, fracción II, y noveno transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, son del tenor siguiente:

“ARTÍCULO 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:

(...)

XI. Las previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional...”

“ARTÍCULO 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

(...)

XV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la ley...”

“ARTÍCULO 37. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

(...)

II.- Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión,”

“Artículo Noveno.- Las menciones que en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas o administrativas de carácter federal se hagan de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o en particular de alguno de sus preceptos, se entenderán referidas a esta Ley o a los artículos de este

ordenamiento legal cuyo contenido coincida con los de la Ley que se deroga, con la salvedad que se establece en el transitorio segundo de esta Ley.”

Asimismo, el numeral 16 del punto QUINTO del Acuerdo General Plenario 6/1996, señala:

“QUINTO. Los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligados a presentar declaraciones sobre situación patrimonial son:

(...)

“16. Directores de Área.

(...)”

De lo dispuesto en los artículos que anteceden se desprende la obligación a cargo de los servidores públicos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que tengan el nombramiento de Directores de Área, de presentar declaración patrimonial de conclusión de encargo dentro de los sesenta días naturales siguientes al término del mismo.

En el caso de ***** se le atribuye como infracción administrativa, la presentación extemporánea de la declaración patrimonial de conclusión de encargo, con motivo de la terminación de su nombramiento como Directora de Área adscrita a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, por lo que es menester analizar las constancias de autos para determinar si su conducta se ajusta a la hipótesis de responsabilidad

administrativa y, si derivado de ello, ha lugar a imponerle alguna sanción o, en su defecto, existen causas que justifiquen su actuación y deba atenuarse o relevársele de la misma.

De las copias fotostáticas certificadas del nombramiento de ***** , del aviso de baja por invalidez de la propia servidora pública, así como del acuse de recibo de la presentación de su declaración de conclusión de encargo, documentos que corren agregados al presente expediente de responsabilidades administrativas, se advierte que el treinta de junio de dos mil tres, el Secretario de la Contraloría y Gestión Administrativa de la Suprema Corte de Justicia expidió nombramiento a ***** , como Directora de Área, adscrita a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, con efectos la prórroga de nombramiento a partir del primero de julio del mismo año; y, posteriormente, el treinta de diciembre de dos mil tres se expidió el aviso de baja de ***** , como Directora de Área, por invalidez con efectos a partir de esa misma fecha y, el ocho de marzo de dos mil cuatro, se recibió extemporáneamente la declaración de conclusión de encargo presentada por ***** .

De los señalados elementos de convicción, los cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a este procedimiento, se arriba al convencimiento de que:

- ***** , ejerció el cargo de Directora de Área adscrita a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, nombramiento respecto del cual, los servidores públicos que lo ejerzan se encuentran obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en términos de lo que prevé el punto QUINTO, numeral 16, del Acuerdo Plenario 6/1996.

- ***** , causó baja por invalidez al cargo de Directora de Área con efectos a partir del treinta de diciembre de dos mil tres, por lo que a partir de esa fecha, dicha servidora pública estaba obligada a presentar su declaración de situación patrimonial de conclusión de encargo.

- El plazo de sesenta días naturales para la presentación de la declaración patrimonial de conclusión de encargo a que alude la fracción II del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, comenzó a correr a partir del día siguiente en que ***** causó baja por invalidez, esto es, a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil tres, y, por tanto, dicha declaración debía presentarse a más tardar el veintiocho de febrero de dos mil cuatro.

- ***** , presentó su declaración de situación patrimonial de conclusión de encargo el ocho de marzo de 1994, esto es, después del veintiocho de febrero del mismo año, fecha en la que concluía el plazo para su presentación.

- La declaración patrimonial de conclusión de encargo de ***** fue presentada extemporáneamente, por lo que se ubicó en la hipótesis de responsabilidad administrativa prevista en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al no haber cumplido con la obligación que le impone el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de presentar con oportunidad las declaraciones de situación patrimonial.

De esta suerte, se pone de manifiesto que dicha servidora pública se abstuvo de presentar dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a la conclusión de su encargo como Directora de Área adscrita a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, por lo que al existir la obligación de presentar, la respectiva declaración patrimonial, por lo que al existir la obligación de presentarla para los servidores públicos de su categoría y funciones y, no haberlo hecho así, es evidente que incurrió en la falta administrativa que se le atribuyó.

Empero, se considera que como lo concluyó la Contraloría de este Alto Tribunal en el dictamen emitido en este procedimiento de responsabilidad administrativa, *****, no es responsable de la infracción administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación señalada en el artículo 8, fracción XV, en relación con lo dispuesto en el artículo 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos y en el punto QUINTO, numeral 16, del Acuerdo General Plenario 6/1996.

Lo anterior es así, porque sin desconocer de manera alguna la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que les asisten a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para concluir si una falta administrativa debe ser sancionada es indispensable tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión tal como lo reconoce el legislador en el artículo 37, párrafo antepenúltimo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme al cual tratándose de la omisión en la presentación de declaración patrimonial de conclusión de encargo, es menester analizar si la falta respectiva encuentra alguna causa de justificación.

El citado numeral dispone:

“(...)

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción II, se inhabilitará al infractor por un año.

(...)”

De lo dispuesto en este numeral, aun cuando la hipótesis se refiere a la omisión de la presentación de la declaración patrimonial de conclusión de encargo y no a su presentación extemporánea, se estima que, si ante aquella omisión, la

legislación prevé que es factible analizar la existencia de alguna causa justificada, por mayoría de razón, ante una presentación fuera del plazo previsto para esos efectos, debe estudiarse la existencia o no de una causa de esa naturaleza.

En ese orden de ideas, atendiendo a la voluntad del legislador en cuanto a valorar la posible justificación de una falta administrativa relacionada con la presentación de la declaración patrimonial, debe evitarse actuar con un rigorismo a ultranza imponiendo fatalmente sanciones cuando se constate una extemporaneidad en el cumplimiento de una obligación de esa naturaleza, sin que previamente se analicen las características particulares que reviste el caso concreto, pues un prurito de esa índole equivaldría a soslayar el incontrovertible hecho de que pudieran existir situaciones excepcionales que justifiquen plena o parcialmente la conducta respectiva.

Con base en lo anterior, se impone analizar lo que la servidora pública en mención, expresó en su defensa, al rendir el informe que le fuera solicitado con motivo del presente procedimiento de responsabilidad administrativa, argumentos que en síntesis consisten en:

- En el caso no se surte la hipótesis relativa al artículo 37, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que establece que en caso de omisión sin causa justificada en la presentación de la declaración de conclusión de encargo, se inhabilitará al infractor

por un año; toda vez que la conducta en la que incurrió fue la de haber presentado extemporáneamente su declaración de situación patrimonial respectiva y no su omisión.

- Si bien es cierto que no había presentado su declaración patrimonial de conclusión de encargo dentro del plazo legalmente previsto, ello se debió a que se encontraba imposibilitada por causas de fuerza mayor, lo que constituía una excluyente de responsabilidad y por ende la conducta en que incurrió no resulta sancionable, ya que fue a causa del mal estado de salud que padece desde hace varios años de lesiones en la columna vertebral que la imposibilitan para poder caminar, por lo cual le fue prescrito guardar reposo absoluto, y con fecha dieciséis de enero de dos mil cuatro tuvo molestias fuertes dolores de espalda que le impidieron deambular o ponerse de pie, siendo llevada de emergencia a la clínica *****, ordenándose por el médico *****, que fuera internada inmediatamente, y quedó sometida a tratamiento, que aunque fue dada de alta de la clínica referida el treinta de enero de dos mil cuatro, se le recomendó reposo absoluto y, en consecuencia, no pudo atender otra cuestión que no fuera la de su salud, de ahí que si no presentó en tiempo su declaración respectiva, ello no fue una omisión consciente o irresponsable, sino que se debió a que se encontraba imposibilitado físicamente durante el período en que debía hacerlo.

Asimismo, con el objeto de probar las citadas manifestaciones, ***** allegó al sumario el resumen clínico

firmado por el Doctor ***** en el que hace constar lo siguiente:

“***, ingreso el día 16 de enero del presente, por cursar con ***** por lo cual le es imposible la deambulaci3n siendo valorada para ser hospitalizada en esta cl3nica.**

Durante su estancia en el servicio fue manejada con ***.**

Teniendo la paciente una evoluci3n *** , por lo cual se solicita valoraci3n por el servicio de ***** , teniendo *****.**

Otorgándose su alta el 31-01-04”

Del reseñado medio de prueba, se advierte que el mismo arroja datos suficientes para no sancionar a la citada servidora pública y por ende, relevarla de la responsabilidad administrativa en que incurrió al no haber presentado oportunamente su declaraci3n patrimonial de conclusi3n de encargo, ya que existen causas excluyentes que justifican su actuaci3n, por lo que debe declararse infundado el procedimiento de responsabilidad administrativa instruido en su contra.

Ciertamente, el resumen cl3nico de la paciente ***** , signado por el Doctor ***** , resulta apto y suficiente para relevar de responsabilidad administrativa a dicha servidora pública, toda vez que por una parte, tal medio probatorio no fue objetado durante la substanciaci3n de este procedimiento, sin que

de los autos se advierta prueba alguna que se contraponga con lo plasmado en el citado elemento de convicción.

Por tanto, no existiendo en autos alguna otra prueba de esa naturaleza emitida por persona calificada por su experiencia o conocimientos técnicos o científicos que permita concluir que, a raíz de los padecimientos clínicos presentados por el citado servidor público, éste se encontraba en posibilidad de presentar oportunamente su declaración de conclusión de encargo, pues se trata de hechos que escapan a la cultura común de quien tiene que realizar un análisis jurídico ya que se requieren de conocimientos técnicos especializados, debe concluirse que en el caso existió causa justificada para la presentación extemporánea de la declaración patrimonial de conclusión de encargo.

En abono a lo anterior, de especial relevancia resulta señalar que la presentación de la respectiva declaración patrimonial no se limita al simple hecho de acudir ante la Contraloría de este Alto Tribunal o incluso remitir el documento correspondiente por medios electrónicos, sino que conlleva una serie de actividades que implican recabar diversa documentación y realizar su análisis detenido con el fin de dar sustento a los datos plasmados en la declaración patrimonial.

Al efecto cobra aplicación, por analogía, la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 31/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial

de la Federación número 57, de septiembre de mil novecientos noventa y dos, página diecisiete, que reza:

“QUEJA ADMINISTRATIVA. POR REGLA GENERAL DEBE DECLARARSE FUNDADA, SI EXISTE UNA DILACIÓN EXCESIVA EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE SENTENCIA DE UN ASUNTO A MENOS QUE SE DEN SITUACIONES EXCEPCIONALES QUE LO JUSTIFIQUEN.- De conformidad con el artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y la Ley de Amparo establece los plazos y términos relativos a la tramitación y resolución de los juicios y recursos que regula, por lo que la formulación de un proyecto de sentencia en un asunto y lógicamente, su resolución, fuera de ellos se traduce por regla general, en una irregularidad en la administración de justicia, lo que implica que si, por ese motivo se formula una queja administrativa en contra de un funcionario judicial y queda debidamente demostrada, la misma debe declararse fundada y, como consecuencia, imponer las correcciones disciplinarias correspondientes y adoptar las medidas convenientes, siempre y cuando no se presente alguna situación excepcional que lo justifique”.

Por tanto, en virtud de haberse acreditado que ***** se ubicó en la hipótesis de infracción administrativa y que, no obstante lo anterior, probó la existencia de causas justificadas que le impidieron la presentación oportuna de su declaración patrimonial de conclusión de encargo, se estima que se le debe relevar de responsabilidad administrativa por la comisión de dicha falta y, por tanto, no existe motivo para sancionarla.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Conforme a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución, ***** no es responsable administrativamente de la falta materia de este procedimiento de responsabilidad administrativa.

Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal, a efecto de que notifique personalmente esta determinación a la servidora pública sujeta al procedimiento y, en su oportunidad, lo archive como totalmente concluido.

Así, lo resolvió el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.